



I. EXPEDIENTE D-11604 AC -SENTENCIA C-223/17 (Abril 20)
M.P. Alberto Rojas Ríos

1. Norma acusada

LEY 1801 DE 2016

(julio 29)

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

TÍTULO VI.

DEL DERECHO DE REUNIÓN.

CAPÍTULO I.

CLASIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN

ARTÍCULO 47. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS AGLOMERACIONES DE PÚBLICO. Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a sus características y requisitos, se establecen tres categorías:

1. Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público.
2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas.
3. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.

PARÁGRAFO. El Gobierno nacional determinará, dentro del año siguiente de la expedición de este Código, las variables tales como: aforo, tipo de evento, clasificación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión, que determinarán la clasificación del evento como uno de los señalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo. En concordancia con las características de cada uno de los municipios del país en cuanto a condiciones operativas y funcionales de los concejos municipales o distritales de gestión de riesgo de desastre.

ARTÍCULO 48. REGLAMENTACIÓN. Las autoridades municipales en concurso con los consejos municipales y distritales de gestión del riesgo, reglamentarán las condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas de conformidad con lo expresado en este Código y con sujeción a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional.

CAPÍTULO II.

EXPRESIONES O MANIFESTACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO.

ARTÍCULO 53. EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA EN EL ESPACIO PÚBLICO. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo.

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta.

PARÁGRAFO 1o. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se considerarán por sí mismas como alteraciones a la convivencia.

PARÁGRAFO 2o. El que irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal, será objeto de aplicación de medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 4.

ARTÍCULO 54. USO DE VÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN O MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA EN EL ESPACIO PÚBLICO. Los alcaldes distritales o municipales, salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, deberán autorizar el uso temporal de vías dentro de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. En el caso de las vías arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos.

ARTÍCULO 55. PROTECCIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN PÚBLICA FRENTE A SEÑALAMIENTOS INFUNDADOS. Con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica.

LIBRO TERCERO.

MEDIOS DE POLICÍA, MEDIDAS CORRECTIVAS, AUTORIDADES DE POLICÍA Y COMPETENCIAS, PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS O CONFLICTOS.

TÍTULO I.

MEDIOS DE POLICÍA Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

CAPÍTULO I.

MEDIOS DE POLICÍA.

ARTÍCULO 162. INGRESO A INMUEBLE CON ORDEN ESCRITA. Los alcaldes podrán dictar mandamiento escrito para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público, en los siguientes casos:

1. Para aprehender a persona con enfermedad mental que se encuentre en un episodio de la enfermedad de crisis o alteración que pueda considerarse peligrosa o enfermo contagioso.
2. Para inspeccionar algún lugar por motivo de salubridad pública o transgresión de las normas ambientales.
3. Para obtener pruebas, cuando existan motivos fundados, sobre la existencia de casas de juego o establecimiento que funcione contra la ley o reglamento.
4. Para practicar inspección ordenada en procedimiento de Policía.

5. Para examinar instalaciones de energía eléctrica y de gas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores y máquinas en general y almacenamiento de sustancias inflamables o explosivas con el fin de prevenir accidente o calamidad, cuando existan indicios de riesgo o peligro.

6. Verificar que no exista maltrato, abuso o vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores y discapacitados.

7. Verificar el desarrollo de actividades económicas, comerciales, industriales, de prestación, venta o depósito de bienes o servicios contrarios a la ley o reglamento.

8. Cuando se adelante obra en un inmueble, para determinar el cumplimiento de las normas en materia de usos de suelo, obras o urbanismo.

9. En establecimientos públicos o de comercio o en inmuebles donde se estén desarrollando obras o actividades económicas, cuando se requiera practicar diligencia o prueba ordenada en un procedimiento de Policía, para utilizar un medio o para ejecutar una medida correctiva de Policía.

PARÁGRAFO 1o. La orden de ingreso a inmueble deberá ser escrita y motivada. Así mismo, deberá levantarse un acta en la que conste el procedimiento de Policía adelantado. El funcionario que autorizó el ingreso al inmueble deberá enviar de inmediato la orden de ingreso y el acta al Ministerio Público. Podrán utilizarse y enviarse otros medios de documentación del procedimiento.

PARÁGRAFO 2o. El ingreso a un inmueble deberá realizarse de manera respetuosa, tanto con las personas como con sus bienes. En caso de oposición a la orden de ingreso, la autoridad podrá hacer uso de la fuerza de manera excepcional y proporcional a los actos opuestos.

PARÁGRAFO 3o. Para la práctica de pruebas los gobernadores y alcaldes podrán disponer comisión para el ingreso al inmueble determinado.

PARÁGRAFO 4o. Si de manera circunstancial o por descubrimiento inevitable en el procedimiento, se encuentran elementos que justifiquen la iniciación de una acción penal, la autoridad de Policía informará al personal uniformado de la Policía Nacional o a la Policía Judicial para que inicie el procedimiento estipulado en el Código de Procedimiento Penal.

2. Decisión

Primero.- Declarar **INEXEQUIBLE** los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Y 75, contenidos en el título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016 "*Por la cual se expide el Código de Policía y Convivencia*", por violación de la reserva de Ley Estatutaria establecida en el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política. Los efectos de la anterior declaración de **INEXEQUIBILIDAD** se difieren por un término no mayor al agotamiento de las siguientes dos legislaturas, es decir, hasta antes del 20 de junio de 2019.

Segundo.- Declarar **INEXEQUIBLE** el artículo 162 de la Ley 1801 de 2016 "*Por la cual se expide el Código de Policía y Convivencia*".

3. Síntesis de la providencia

La Sala examinó si la regulación del derecho de la reunión y protesta pública pacífica contenida en los artículos 47, 48, 53, 54 y 55 de la Ley 1801 de 2016, era violatoria de la reserva de ley estatutaria contenida en el literal a) del artículo 152 de la Constitución, conforme a los términos de la demanda. Sin embargo consideró que era necesario efectuar la integración normativa de las normas demandadas, con los artículos que conforman la totalidad del Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016, titulado "Del derecho de reunión", a efectos de efectos de un análisis y de un pronunciamiento integral.

En su análisis la Corte Constitucional explicitó el carácter fundamental de los derechos de reunión y manifestación pública pacífica, señalando el reconocimiento expreso hecho por el artículo 37 de la Constitución y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente reiteró desde su jurisprudencia, la interrelación y la interdependencia existente entre los derechos fundamentales de reunión, manifestación pública pacífica, libertad de expresión y los derechos políticos, lo que resultaba determinante para el examen del cargo de violación de reserva de ley estatutaria por las normas demandadas del Código Nacional de Policía y Convivencia.

Finalmente la Sala procedió a la solución del cargo de inconstitucionalidad, para lo cual aplicó los criterios de evaluación de la reserva sobre los "*Derechos y deberes fundamentales de las personas*" construidos por la jurisprudencia, entre otras por las sentencias C-646 de 2001, C-226 de 2008, C-818 de 2011, C-511 de 2013, C-044 de 2015 y C-007 de 2017, hasta concluir que la normatividad dispuesta en el Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016, titulado "*Del derecho de reunión*", consistía en una regulación integral de los derechos fundamentales de reunión y protesta pública pacífica, con incidencia sobre los derechos interrelacionados y concurrentes de libertad de expresión y los derechos políticos, que versaba sobre los elementos estructurales y los principios básicos de esos mismos derechos, en el sentido de haber consagrado límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, lo que obliga a que esa regulación deba ser expedida por los procedimientos de la ley estatutaria y no por los de la ley ordinaria, como en efecto sucedió, razón por la cual se procedió a la declaratoria de inexequibilidad, otorgando un plazo al Congreso de la República para que en ejercicio de sus competencias constitucionales, expida la normatividad respectiva.

La Sala analizó también la demanda de inconstitucionalidad propuesta en contra del artículo 162 de la Ley 1801 de 2016, que faculta a los alcaldes para dictar mandamiento escrito para el registro de domicilios y de sitios abiertos al público. El problema jurídico consistió en determinar si era violatorio del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y de la garantía de la reserva judicial que lo avala, contenidas en el artículo 28 de la Constitución Política, la facultad concedida a los alcaldes que les permite "dictar mandamientos escritos para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público".

La Corte consideró desde su jurisprudencia, que la noción constitucional del domicilio excede la de casa de habitación prevista por el Código Civil, y que involucra diversos escenarios y espacios de actuación de las personas, en los que se ejercen derechos fundamentales concurrentes como la intimidad personal y familiar, la libertad, la seguridad individual, la propiedad, la honra y los derechos económicos, lo que hace que su protección deba ser resguardada y que las cláusulas de excepción sean realmente excepcionales y no hayan sido dispuestas al modo de facultades amplias o generales.

En relación con la inviolabilidad del domicilio la Corte reiteró que es un derecho fundamental autónomo, establecido en el artículo 28 de la Constitución junto con el derecho fundamental a la libertad personal, que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace parte del núcleo esencial de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la libertad, la seguridad personal y la propiedad. Adicionalmente señaló que para su protección, la Constitución estableció las garantías de la reserva legal y la reserva judicial, considerando que la garantía de la reserva judicial del domicilio, tiene igual dimensión y valor a la garantía de la reserva judicial establecida alrededor del derecho a la libertad personal, precisando además, que las excepciones que se hagan al derecho a la inviolabilidad del domicilio, deben ser de carácter extraordinario e inusual, debiendo ser tratadas con carácter restrictivo, como lo ha señalado esta Corporación.

La Sala examinó la facultad otorgada a los alcaldes que les permite dictar mandamientos escritos para el registro de domicilios por autoridades de policía, encontrando que las mismas eran muy generales y que no satisfacían los criterios de excepcionalidad, siendo por lo mismo violatorias del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio contenida en el artículo 28 de la Constitución y de la reserva judicial allí dispuesta.

4. Salvamentos parciales y aclaración de voto

Los magistrados **Luis Guillermo Guerrero Pérez** y **Alejandro Linares Cantillo** se apartaron de la anterior decisión.

En concepto del magistrado **Luis Guillermo Guerrero Pérez**, en primer lugar, en relación con el derecho de reunión y de manifestación pública pacífica, no cabía la unidad normativa realizada por la Corte, en la medida en que las normas del Código de Policía que fueron objeto de la declaratoria de inexequibilidad en esta materia, en general, se desenvolvían en el ámbito del derecho de policía, con dimensiones principalmente preventivas y operativas, en escenarios que comprendían, también, el manejo de las denominadas aglomeraciones complejas y no complejas, y no se orientaban a regular de manera integral el ejercicio del derecho. Por la misma razón no cabía predicar en relación con ellas la existencia de una reserva de ley estatutaria en los términos en los que se hizo en la decisión mayoritaria. Por otro lado, para el magistrado **Guerrero Pérez**, tampoco cabía declarar la inexequibilidad del artículo 162, sin hacer un examen detenido de cada uno de los supuestos en los que la habilitación allí prevista resulta aplicable, y que, en general atienden a situaciones de orden policivo que, como están concebidas en la ley, no implican limitar la inviolabilidad del domicilio.

Por su parte el magistrado **Alejandro Linares Cantillo**, manifestó que en jurisprudencia reiterada, la Corte Constitucional ha establecido que la reserva de ley estatutaria, dispuesta en el artículo 152 Constitucional, no debe comprenderse de tal manera que cualquier regulación atinente a los derechos fundamentales deba implementarse a través del procedimiento agravado dispuesto en el artículo 153 de la Carta. Solamente cuando el legislador pretenda regular elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales¹ estará obligado a recurrir a la regulación estatutaria. Esta consideración se adopta en la jurisprudencia con el fin de defender, como regla general en el ordenamiento, la mayoría simple para la adopción de decisiones en la democracia, y como regla especial la de las mayorías calificadas propia de la regulación estatutaria, reservada a asuntos de la mayor trascendencia para la realización de los derechos fundamentales.

En el caso analizado, para el magistrado **Linares Cantillo**, las normas que fueron objeto de control por parte de la Corte Constitucional ofrecían los más variados contenidos normativos, enfocados especialmente a la regulación de asuntos operativos sobre la realización del derecho de reunión y manifestación pública, muchos de ellos que ya habían sido objeto de control de constitucionalidad, determinando la mayoría, en un análisis global y poco detallado, sin distinción de los diferentes contenidos normativos, que la totalidad de las normas del Título VI del Libro Segundo del Código Nacional de Policía y Convivencia, debían someterse a aprobación mediante leyes estatutarias. En un escenario como el que enfrentaba la Corte en este análisis, lo apropiado hubiera sido analizar la afectación concreta respecto al contenido esencial y estructural de los derechos de reunión y manifestación pública, salvaguardando en la mayor medida posible el ejercicio legislativo ordinario, que se reitera, es apropiado cuando de regular derechos fundamentales se trata. Para el magistrado **Linares Cantillo** no resulta aceptable la posición de la mayoría, en tanto maximiza la restricción de la regulación estatutaria y con ello cambia la regla general predicable de la regulación de los derechos fundamentales, que favorece la mayoría simple para la toma de decisiones legislativas sobre los mismos.

Agregó que la posición adoptada por la mayoría implica un ejercicio oficioso del control de constitucionalidad, puesto que la demanda se circunscribió a los contenidos de los artículos 47, 48, 53 (parcial), 54 y 55, siendo las razones expuestas por la posición mayoritaria,

¹ Cfr. Sentencias C-145/1994, C-226/1994, C-319/2006 y C-748/2011.

insuficientes para justificar una integración normativa de todo el Título VI del Libro Segundo (artículos 47 a 75), que desconoce el carácter rogado del control a cargo de la Corte Constitucional.

El magistrado **Linares Cantillo** también manifestó su desacuerdo con la decisión de inexecutable del artículo 162 del Código Nacional de Policía y Convivencia, puesto que existen dos precedentes importantes que, en su criterio, fueron desconocidos por la mayoría en el presente caso, y que se encuentran en las sentencias C-024 de 1994 y C- 212 de 2017 adoptada el 5 de abril de este año, en la que se determinó la executable de normas muy similares. En la segunda providencia, se estableció un condicionamiento tendiente a que el ingreso al domicilio sea objeto de control judicial posterior –para maximizar la eficacia del artículo 28 Constitucional, respecto del artículo 163 del Código Nacional de Policía y Convivencia, que hubiese sido aplicable al presente caso. Considera importante resaltar que si en aquellas oportunidades la jurisprudencia determinó la executable, con un condicionamiento, de normas análogas a la ahora analizada, con mayor razón debía mantenerse en el ordenamiento la posibilidad de dictar mandamientos para el registro de domicilios o de sitios abiertos al público, en circunstancias específicas, por parte de los Alcaldes.

Por su parte, los magistrados **Antonio José Lizarazo Ocampo** y **José Antonio Cepeda Amarís**, manifestaron su **salvamento parcial de voto**.

El magistrado **Antonio José Lizarazo Ocampo**, sostuvo que no obstante compartir las consideraciones de la Sala en relación con la reserva de ley en materia de regulación del derecho de reunión y manifestación en el espacio público, así como en relación con el registro del domicilio y, por lo mismo, con la declaratoria de inexecutable de las regulaciones referidas a tales materias, se apartaba de la decisión mayoritaria en cuanto incluye la totalidad del Capítulo VI del Libro Segundo del Código de Policía y la totalidad del Artículo 162 de dicho Código, por cuanto con esa decisión somete la Corte a reserva de ley regulaciones relacionadas con actividades ajenas al derecho de reunión y de manifestación, así como el registro de inmuebles distintos al domicilio, lo cual excede la reserva de ley prevista en los Artículos 37 y 28 de la Constitución.

El magistrado **José Antonio Cepeda Amarís**, se apartó parcialmente de la presente decisión, por considerar que la potestad de los Alcaldes para emitir órdenes escritas destinadas al registro de domicilios y de sitios abiertos al público no era, en sí misma, contraria a la Constitución, en la medida en que no comprometía el principio de libertad.

Sostuvo que, como lo ha hecho la jurisprudencia de la Corte (Sentencia C-024 de 1994), debía distinguirse entre los allanamientos y registros al domicilio con fines punitivos, frente a los cuales la Constitución rodea al individuo de cuidadosas garantías de protección a la inviolabilidad de domicilio, y los registros de carácter administrativo, que poseen un sentido estrictamente preventivo y no habilitan a las autoridades para la obtención de pruebas con fines sancionatorios, ni tienen en sí mismos la naturaleza de procedimientos penales.

Las excepcionales intervenciones por orden escrita de los Alcaldes, destacó el Magistrado Cepeda, tenían el importante objetivo de preservar, especialmente, los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la salubridad de las personas, en todas aquellas situaciones extremas de riesgo especificadas en la disposición, por lo cual, en su criterio, resultaban plenamente compatibles con la Carta Política. Preciso, además, que, si bien algunas de las causales que habilitan tales registros podían ser susceptibles de discusión, desde el punto de vista del principio de estricta legalidad, la potestad del alcalde para ordenar dichos registros era compatible con la Constitución y, por consiguiente, la norma debió ser declarada executable.

Finalmente los magistrados **Aquiles Arrieta Gómez** y **María Victoria Calle Correa**, aclaran el voto. El magistrado **Arrieta Gómez**, manifestó que aclara su voto para resaltar la importancia de la protección de los derechos fundamentales, no sólo en cuento a la

restricción o precisión de los límites materiales de su ejercicio, sino también en cuanto a la salvaguarda del buen funcionamiento de los "aparatos" del "cuarto de máquinas" de la Constitución del cual depende el desarrollo y construcción normativa de todo derecho fundamental, tal como ocurre en la presente decisión, al proteger el poder ampliado de las minorías políticas en democracia, para producir normas propias de legislación estatutaria.

La magistrada **Calle Correa**, por su parte indicó que comparte la decisión pero aclara el voto al considerar que lo decidido no es óbice para que en el Código de Policía, bajo ley ordinaria se regulen asuntos puntuales de policía relacionados con el ejercicio de libertad de reunirse y manifestarse públicamente que comprometan la convivencia pacífica.

I. EXPEDIENTE RDL-003 -SENTENCIA C-224/17 (Abril 20)
M.P. Alberto Rojas Ríos

1. Norma revisada

DECRETO LEY 154 DE 2017
(Febrero 3)

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 "Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera", y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 22 de la Constitución política establece que la paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Que en la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado el Gobierno Nacional suscribió, el 24 de noviembre de 2016, con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el Acuerdo Final desarrolla cinco ejes temáticos relacionados con i) una Reforma Rural Integral; ii) Participación Política; iii) Fin del Conflicto; iv) Solución Integral al Problema de las Drogas Ilícitas; y v) Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto; así como un sexto punto atinente a la implementación, verificación y refrendación de dichos acuerdos.

Que el punto 3 del Acuerdo incluye lo pactado sobre "Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo".

Que para cumplir con este fin, el Acuerdo incluye, entre otras medidas, la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Que en el punto 3.4.3 señala que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tiene como objeto el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata el citado Acuerdo que amenacen la implementación del mismo y la construcción de la paz.

Que conforme a lo señalado en el Decreto 2897 de 2011 son funciones del Ministerio de Justicia participar en el diseño y definición de la política criminal y penitenciaria del Estado, la prevención del delito, las acciones contra la criminalidad organizada y el tratamiento penitenciario.

Que corresponde al Ministerio del Interior, entre otras materias, formular y adoptar las políticas del Gobierno, en materias relativas al orden público interno, los asuntos políticos, la paz, la convivencia ciudadana y los derechos y libertades fundamentales, a la participación ciudadana en la vida y organización social y política de

la Nación, a los asuntos referentes a los grupos étnicos, a las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales de la República y demás asuntos relativos a ellas.

Que corresponde al Ministerio de Defensa Nacional la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial y la seguridad en el territorio, así como el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática.

Que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde, entre otras funciones: i) formular políticas y fijar directrices para asegurar el ejercicio eficiente y coherente de la acción penal, las cuales, en desarrollo de los principios de unidad de gestión y jerarquía, son vinculantes y de aplicación obligatoria para todas las dependencias de la entidad. ii) Formular, dirigir, definir políticas y estrategias de priorización para el ejercicio de la actividad investigativa a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que tengan en cuenta, entre otros, criterios subjetivos, objetivos, complementarios y en especial el contexto de criminalidad social del área geográfica que permitan establecer un orden de atención de casos con el fin de garantizar, en condiciones de igualdad material, el goce efectivo del derecho fundamental de administración de justicia. iii) Dirigir y coordinar, en el marco de las competencias de la Fiscalía General de la Nación, la realización de actividades que permitan la atención e investigación temprana de delitos y/o actuaciones criminales, dentro del marco de la Constitución, leyes estatutarias, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. iv) Hacer seguimiento al interior de la Fiscalía General de la Nación de la ejecución e implementación de la política en materia criminal y prevención del delito y las demás que tengan incidencia en el cumplimiento de las funciones de la entidad. v) Elaborar proyectos de ley que por iniciativa del Fiscal General de la Nación se presenten al Congreso de la República en materia de política criminal.

Que a la Defensoría del Pueblo le corresponde, entre otras funciones i) velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. ii) Diseñar, dirigir y adoptar, con el Procurador General de la Nación, las políticas de promoción y divulgación de los Derechos Humanos en el país, en orden a tutelarlos y defenderlos. iii) Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos y velar por su promoción y ejercicio.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

Que el día 30 de noviembre de 2016, el Congreso de la República, adoptó la decisión política de refrendar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el Acto Legislativo No. 1 de 2016 ha entrado en vigencia por haberse surtido el proceso de refrendación en los términos definidos por la Sentencia C-699-16 de la H Corte Constitucional, dado que se han cumplido los hechos constitutivos del proceso de refrendación popular del Acuerdo Final Definitivo entre el Gobierno Nacional y las FARC EP suscrito el 24 de noviembre de 2016, como son la realización del plebiscito verificado el 2 de octubre de 2016; el respeto y la aceptación de su resultado; la posterior interpretación y desarrollo de buena fe, a partir del diálogo con personalidades y agrupaciones políticas, sociales y religiosas, los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso, y las víctimas y sus organizaciones; y la renegociación del Acuerdo inicial en la Mesa de Diálogos de La Habana, que condujo a la suscripción de un Acuerdo Final Definitivo suscrito el 24 de noviembre de 2016, que fue refrendado, en desarrollo de los artículos 30 y 1330 de la Constitución Política, por el Senado de la República el 28 de noviembre de 2016 y por la Cámara de Representantes el 29 de noviembre de 2016.

Que el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 consagró un artículo transitorio en el cual se conceden facultades presidenciales para la paz, el cual señala que el Presidente de la República dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del citado Acto Legislativo queda facultado para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que se requiere ejercer las citadas facultades para crear una comisión que tenga por objeto el diseño y, el seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

En consideración a lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1 . *Creación y objetivo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.* la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuyo objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

Artículo 2. Integración. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, estará integrada así:

- 1, Presidente de la República, quien presidirá
2. El Ministro del Interior.
3. Ministro de Defensa.
4. Ministro de Justicia y del Derecho.
5. El Fiscal General de la Nación.
6. El Defensor del Pueblo.
7. Procurador General de la Nación.
8. El Director de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
9. El Comandante las Fuerzas Militares.
10. Director General la Policía Nacional.
11. (3) expertos reconocidos en la materia. 1 Dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.
12. Dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.

Parágrafo 1. Los tres (3) expertos en la materia, serán elegidos por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final.

Parágrafo 2. La Comisión podrá invitar a sus sesiones a representantes de los partidos y movimientos políticos, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a representantes de organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en expertos y expertas sobre la temática a tratar cuando lo estime conveniente.

Parágrafo 3. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres.

Parágrafo 4. Cuando la Comisión sesione por fuera de la ciudad de Bogotá, a los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad señalados en los numerales 11 y 12 del presente artículo, se les cubrirán los desplazamientos y el alojamiento en los términos que señale el Gobierno Nacional.

Artículo 3°. Funciones. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sin perjuicio de las funciones y competencias correspondientes a las diferentes autoridades y entidades públicas, cumplirá las siguientes funciones:

1. Diseñar, hacer seguimiento, coordinar intersectorialmente y promover la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto.
2. Formular y evaluar el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el arto 1 de este decreto, que será adoptado por el Gobierno Nacional.
3. Evaluar la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto.
4. Coordinar con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a las manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuyan a complementar el esfuerzo estatal;
5. Recomendar reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto.
6. Solicitar a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas de que trata el artículo 1 del presente Decreto y hacer seguimiento del contenido de dichos informes.
7. Diseñar y construir las estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto,

entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.

8. Hacer recomendaciones para modificar o derogar las normas que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto.

9. Proponer a las autoridades competentes mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado, con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos.

10. Informar periódicamente a las Ramas del Poder Público, a la opinión pública y a los organismos internacionales, los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto.

11. Garantizar el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la "Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición" y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo.

12. Hacer recomendaciones a las Ramas del Poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto.

13. Hacer seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formular propuestas para actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y que en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto.

14. Diseñar políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo a que hace referencia el artículo 10 del presente decreto, definiendo tratamientos específicos para los integrantes dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.

15. Garantizar la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto comisión.

16. Participar en el diseño de un nuevo Sistema prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales a que hace referencia el artículo 1º del presente decreto.

Parágrafo. Para el cumplimiento de sus funciones la comisión podrá crear comisiones técnicas de trabajo que contarán por lo menos con uno de los integrantes de la Comisión a que se refieren los numerales 11 y 12 del artículo 2º del presente decreto.

Artículo 4. *Secretaría Técnica.* La Comisión Nacional de Garantías tendrá una Secretaría Técnica, que estará a cargo del Delegado Presidencial de que trata el punto 3.4.7.3. del Acuerdo Final.

Artículo 5. *Periodicidad.* La Comisión se reunirá una vez al mes por convocatoria de la Secretaría Técnica y de manera extraordinaria cuando se requiera a solicitud de cualquiera los integrantes de Comisión.

Artículo 6. *Funcionamiento de la Comisión.* El Gobierno nacional tomará las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 7. *Reglamento Interno.* La Comisión adoptará su propio reglamento.

Artículo 8. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 3 de febrero de 2017

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior

Juan Fernando Cristo Bustos.

El Ministro de Justicia y del Derecho

Jorge Eduardo Londoño Ulloa

El Ministro de Defensa Nacional

Luis Carlos Villegas Echeverri

2. Decisión

Declarar **EXEQUIBLE** el Decreto Ley 154 del 3 de febrero de 2017, *"por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016"*, bajo el entendido de que los particulares que participan en la comisión estarán sometidos al régimen de responsabilidad establecido para los servidores públicos.

3. Síntesis de la providencia

La Corte Constitucional constató que el Decreto Ley 154 de 2017, mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en el marco del Acuerdo de Paz, cumplía con todos los requisitos de procedimiento para su formación. Advirtió que, en cuanto a la forma, el Decreto con fuerza ley fue suscrito por el Presidente de la República, así como por los Ministros de Justicia y del Derecho, Interior y Defensa Nacional. Consta de un título adecuado, se invoca la cláusula de habilitación constitucional (Artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016) y contiene una exposición de motivos. Respecto a la competencia, el texto sometido al control de la Corte fue expedido dentro del término de 180 días contados a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016, siendo sometido a un control automático de constitucionalidad. De igual manera, Decreto Ley 154 de 2017, logra superar los juicios de conexidades extrínseca e intrínseca, finalidad y necesidad estricta de la medida.

En relación con el contenido material, la Corte consideró que los ocho artículos que integran el Decreto Ley 154 de 2017 se ajustan a la Constitución, por cuanto se se ciñen a los compromisos constitucionales e internacionales de salvaguarda y protección de los líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y personas vinculadas con la implementación del Acuerdo Final. De igual manera, su conformación y funcionamiento no invade competencia alguna atribuida a las diversas autoridades públicas que la integran, ni tampoco desconoce las competencias asignadas al Congreso de la República en materia de política criminal.

En lo atinente a la participación de determinados particulares en la conformación de la Comisión Nacional de Garantías, prevista en el artículo 2º del Decreto Ley 154 de 2017, la Corte condicionó la exequibilidad de esta norma, en el entendido que aquéllos quedaban sometidos al régimen jurídico propio de los servidores públicos.

4. Salvamentos parciales de voto

Los magistrados **María Victoria Calle Correa**, **Luis Guillermo Guerrero Pérez** y **Alberto Rojas Ríos**, manifestaron su salvamento parcial de voto con relación a la decisión.

El magistrado **Alberto Rojas Ríos** manifestó su salvamento de voto en relación con la declaratoria de exequibilidad del párrafo 4º del artículo 2º del Decreto Ley 154 de 2017, relacionada con la asunción de gastos de desplazamiento y alojamiento de los particulares que integran la Comisión Nacional de Garantías, por parte del Gobierno Nacional. En su concepto, la referida disposición vulnera el principio de legalidad del gasto público.

El Magistrado **Luis Guillermo Guerrero Pérez** salvó parcialmente el voto por cuanto considera que no se ajusta a la Constitución la atribución a particulares, en los términos en los que se hace en el decreto objeto de control, de competencias para, en el ámbito de una comisión, participar en el diseño de la política criminal del Estado y en las tareas de coordinación interinstitucional que demanda la ejecución de la misma.

La Magistrada **María Victoria Calle Correa** se apartó parcialmente de la decisión mayoritaria en cuanto que consideraba que no cabía el condicionamiento aprobado.

Por su parte, el magistrado **Alejandro Linares Cantillo**, anunció una aclaración de voto.

I. EXPEDIENTE D-11648 -SENTENCIA C-225/17 (Abril 20)
M.P. Alejandro Linares Cantillo

1. Norma acusada

LEY 1801 DE 2016
(julio 29)

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

(...)

ARTÍCULO 220. CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA AMBIENTAL Y DE SALUD PÚBLICA. En los procedimientos que se adelantes por comportamientos que afecten el ambiente, el patrimonio ecológico y la salud pública, se presume la culpa o el dolo del infractor a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente."

2. Decisión

Declarar **EXEQUIBLE**, por el cargo analizado, el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 "*Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia*", salvo la expresión "a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente" que se declara **INEXEQUIBLE**.

3. Síntesis de la providencia

La Sala Plena consideró que, en general, la norma bajo examen no genera una afectación desproporcionada al beneficio obtenido, siendo éste mayor al sacrificio generado. La presunción de dolo y culpa que se analiza que resulta de la lógica y la experiencia, tiene naturaleza *iuris tantum*. Esto quiere decir que se trata de un traslado de la carga probatoria que no limita las posibilidades de defensa del investigado, quien dispone de libertad probatoria para demostrar que en la realización del acto imputado, actuó con ausencia de culpabilidad. Se trata de una medida proporcionada ya que requiere la previa demostración, por parte de la entidad pública, de la tipicidad e imputabilidad del comportamiento, respecto de la persona investigada. Con esta distribución razonable de las cargas probatorias, el legislador otorga a las autoridades administrativas correspondientes, un instrumento adecuado para la protección de intereses superiores vinculados con el orden público, necesario para la convivencia pacífica, tales como el medio ambiente y la salud pública.

Con relación, a la expresión "*a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente*", la Corporación dispuso declarar su inexecutable toda vez que al disponer que al investigado le corresponderá demostrar que el hecho no existió o no le es imputable fácticamente, establece en él toda la carga probatoria sobre la ausencia de responsabilidad, es decir, estableció una presunción de responsabilidad contraria al artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, al tratarse de una norma que no incluye una presunción de responsabilidad, construida a partir de la lógica y la experiencia, razonable y proporcionada a los beneficios que pretende, el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016, fue declarado executable, salvo la expresión "*a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente*", que fue se expulsa del

ordenamiento jurídico por contrariar el artículo 29 de la Constitución Política, al relevar a la autoridad administrativa de la carga de la prueba de la realización del comportamiento y de su imputabilidad fáctica.

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Presidente